

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **AURA ELENA ARANGO GIRALDO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES), dentro del proceso tramitado bajo el radicado único nacional No. **05001-31-05-016-2018-00372-01**.

AUTO

De conformidad con el memorial de sustitución de poder, allegado vía correo electrónico por parte de la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. quien representa judicialmente los intereses de COLPENSIONES en este proceso, se procede a reconocer personería a la abogada MAYRENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, identificada con cedula de ciudadanía número 1.152.701.148, y con tarjeta profesional No. 331.069 del Consejo Superior de la Judicatura, para que represente a COLPENSIONES en este proceso como apoderada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos.

1. ANTECEDENTES:

A través de la presente acción judicial, la demandante pretende que se declare que es beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y que por ende le debe ser aplicado el Decreto 758 de 1990, y como consecuencia causó el derecho a la pensión de vejez el 21 de enero de 2006, fecha para la cual tenía 55 años y 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, contabilizando meses completos, es decir, de 28, 29, 30 y 31 días. También

solicita el pago de los intereses moratorios o en forma subsidiaria la indexación y las costas procesales.

Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, expresa al demandante que nació el 21 de enero de 1951, y estuvo afiliada al Sistema General de Pensiones desde septiembre de 1992.

Aduce que es beneficiaria del régimen de transición, porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 43 años de edad.

Afirma que, por desconocimiento, solicitó al ISS la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez el 13 de agosto de 2007, la que fue reconocida y pagada mediante Resolución N°28.492 del 27 de octubre de 2008 en cuantía de \$7'063.554.

Relata que solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez el 26 de abril de 2018, por contar con 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, teniendo en cuenta meses de 28, 29, 30 o 31 días, pero que la entidad se la negó mediante la Resolución SUB 132.462 del 20 de mayo del 2.018.

manifiesta que si se le tienen en cuenta los meses de 28, 29, 30 o 31 días, contaría con 503.85 semanas, entre el 21 de enero de 1986 y el 2º de enero de 2006.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 03 de junio de 2020, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que la demandante era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que en consecuencia, le asistía derecho a la pensión de vejez a partir del 21 de enero de 2006 en cuantía de un salario mínimo legal. Condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$120'369.935, por concepto de retroactivo pensional causado entre el 21 de enero de 2006 y el 30 de mayo de 2020, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, suma que ordenó indexar al momento del pago efectivo.

Para el efecto, argumentó el juez de instancia que si bien la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dice que los años deben contarse sobre 360 días, lo cierto es que el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señala que se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario, siendo la jurisprudencia un criterio auxiliar, por lo que lo único que lo obliga es la Ley. En ese

sentido, concluyó que se deben tener en cuenta los días cotizados por la demandante, entendiendo que si un mes tiene 31 días, este día adicional se debe tener en cuenta y una vez se tienen la totalidad de días laborados, se divide por 7 y de esta manera se obtiene el total de semanas laboradas por la actora.

Por lo anterior, concluyó que la demandante alcanzó a cotizar un total de 3539 días, es decir, 505.57 semanas, acreditando con ello el requisito de las 500 semanas mínimas de cotización, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

En cuanto a la excepción de prescripción, adujo que era evidente que la misma prosperaba en este caso, pero que COLPENSIONES no la había propuesto, y en cuanto a la compensación, también señaló que si bien la entidad no la propuso, la apoderada de la parte demandante en los alegatos de conclusión, autorizó el descuento, ya que había sido probado que a la demandante le había sido pagada la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Las apoderadas judiciales de las partes interpusieron recurso de apelación en los siguientes términos:

APELACIÓN DE COLPENSIONES.

La apoderada de COLPENSIONES, apela la sentencia, argumentando no estar de acuerdo con la motivación del fallo, pues en concepto del Ministerio del Trabajo, se deben tener en cuenta 360 días, no solo para efectos prestacionales, sino también para efectos pensionales, posición que ha sido acogida por el Consejo de Estado, por lo que, la demandante no cumple con el número de semanas exigidas para ser beneficiaria del régimen de transición, esto es, 500 semanas cotizadas.

También solicita que se tenga en cuenta que a la demandante se le pagó la indemnización sustitutiva, dinero que debe ser reintegrado a la entidad en caso de confirmar la sentencia.

De igual forma, solicita que se revise la liquidación del retroactivo pensional y las costas, pues considera que la cuantía objeto de condena es alta para el fallo emitido.

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE:

Manifiesta la apoderada de la accionante, que no está de acuerdo con la absolución de los intereses moratorios, porque si bien el Despacho para absolver argumentó que el reconocimiento de la pensión obedece a una interpretación favorable, lo cierto es que el juez que toma la decisión fundamentado en una norma expresa, es decir, en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Entonces considera que si bien existen distintas posturas jurisprudenciales, la norma es clara, en cuanto al número de días que tiene cada semana, motivo por el cual los intereses moratorios deben concederse, además, porque dichos intereses, se deben pagar por la tardanza en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de factores subjetivos de interpretación, máxime que se ha ocasionado un perjuicio y una vulneración a los derechos fundamentales de la demandante, en virtud de la pensión que debió ser reconocida por COLPENSIONES al momento en que esta se la solicitó.

Aduce que de otro lado, presenta desacuerdo con la interpretación que hizo el juez en sus alegatos de conclusión, pues afirma que la excepción de compensación no fue propuesta por COLPENSIONES y en ese sentido, el artículo 282 del CGP, dispone que si bien los jueces tienen poderes oficiosos y pueden reconocer oficiosamente excepciones en la sentencia, hace salvedad respecto de la prescripción, compensación y nulidad relativa, de tal manera que considera que no es procedente declararla para efectos de compensar el dinero que la demandante recibió por concepto de indemnización sustitutiva.

Finalmente, solicita se revoque la sentencia en cuanto autorizó a COLPENSIONES realizar el descuento del 12% de salud del retroactivo pensional, cuando se trata de una prestación que la demandante no ha recibido.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados de las partes presentaron alegatos oportunamente, anotando resumidamente lo siguiente:

ALEGATOS DE COLPENSIONES.

El fallador en primera instancia realizó de manera errónea la contabilización del tiempo cotizado por la demandante, pues es claro que para efectos laborales, los meses deben ser contados como si tuvieran 30 días sin importar si estos son de 31 o de menos de 30 y así lo estudió el Ministerio de Trabajo en el concepto 53034 31 marzo de 2014. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado

32297 del 05 de febrero de 2008, se refirió a la manera en que deben ser contabilizados los tiempos laborales, indicando que:

“Se ha de recordar que corresponde a una práctica uniforme Laboral, Civil, Comercial, Administrativa y Fiscal tomar todos los meses como periodos iguales de 30 días y por tanto el año de 360; así se ha de tomar específicamente para el salario, pues lo enuncia el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario se debe pagar por periodos iguales que justamente es la medida de 30 días para todos los meses cualquiera que fuere el número calendario de éstos.”

Contrario a lo explicado en párrafo anterior, el Despacho de primera instancia, realizó el cálculo para las 500 semanas que menciona como requisito para la pensión de vejez el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta meses de 31 días, es decir un valor mayor a lo que debió contabilizar.

Por otro lado, solicito respetuosamente que se estudie la condena en cuanto al retroactivo pensional reconocido a la demandante la suma de \$120.369.935. Es cierto que los derechos pensionales no prescriben, pero sobre las mesadas pensionales opera la prescripción. Aunque en el momento procesal pertinente, esto es, en la contestación de la demanda, quien fuera la apoderada de la entidad, no propuso como excepción la prescripción, se debe tener en cuenta el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional que debe ser protegido tal como lo menciona el Acto Legislativo 01 de 2005 y debido a esto debe darse aplicación al fenómeno de la prescripción e igualmente aplicar la compensación sobre las sumas de dinero recibida por la demandante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En cuanto a las costas, se advierte que fueron fijadas en un valor excesivo, por ello también se solicita revisión de estas. Así las cosas, se solicita revocar la decisión de primera instancia de acuerdo con lo expuesto.

ALEGATOS DE LA DEMANDANTE.

En el presente caso, si bien nos encontramos de acuerdo con el Juez de primera instancia cuando declaró a la demandante beneficiaria del régimen de transición, y la norma que se le aplicó para el reconocimiento de la prestación por vejez, **NO** compartimos la decisión de imponer el pago de la indexación y abstenerse de reconocer y ordenar el pago de los intereses moratorios del Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque consideramos que contrario a lo esgrimido por el A quo, la tesis en virtud de la cual se reconoce la pensión, NO fue la aplicación de una condición más beneficiosa, sino de la norma legalmente exigible para la actora, al favorecerse del “Régimen de Transición”.

Al respecto, es sabido que en virtud del Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que: (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales (CSJ SL-1019 del 03-032021, Radicado 86195).

Pese a lo dicho, la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, exaltó que la pensión es un derecho íntimamente relacionado con el mínimo vital, además de que su cuantía está fijada legalmente y tiene una relación de correspondencia con los aportes al sistema, así, todo impago, o pago imperfecto, insustancial e incompleto genera un deterioro cierto, que merece a todas luces una legítima compensación, y en ese sentido, ha subrayado que la obligación constitucional y legal de las entidades administradoras de pensiones no es solo la de pagar de manera oportuna las pensiones de sus afiliados, sino también y fundamentalmente la de pagarlas de manera íntegra, cabal y completa, pues, de lo contrario, se harán merecedoras de la imposición de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 (CSJ SL-1681 del 03-06-2020, Radicado 75127; SL-3130 del 19-08-2020, Radicado 66868; SL84820 del 10-02-2021, Radicado 84820, SL-1019 del 03-03-2021, Radicado 86195; SL-1727 del 14-04-2021, Radicado 75173).

En lo que tiene que ver con el numeral sexto de la sentencia atacada, solicitamos al H. Tribunal, se REVOQUE la orden, de considerar que sobre el tiempo en que se está ordenando el retroactivo pensional, mi mandante se encontraba desprotegida en ese riesgo por parte del Sistema de Salud Contributivo, por lo que mal se haría, autorizar un descuento para un concepto que no fue cubierto por el Sistema en Salud y que cada que la mandante requería de su atención, no fue protegido y menos prestado por ninguna Entidad Promotora de Salud.

Estos descuentos se efectúan para asegurar la prestación de este servicio esencial durante los períodos que se van causando a futuro. Es decir, el aporte en salud se

hace mes anticipado para garantizar que en el mes siguiente al pago del aporte, el trabajador o pensionado, como en este caso, pueda acceder al sistema sin inconvenientes.

Por el interregno que se ordenó el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, mi mandante, o bien estuvo desprotegida en materia de salud, o bien pagó los aportes de su bolsillo como trabajador independiente. Obligarla a asumir nuevamente el pago de aportes en salud de períodos que ya se encuentran vencidos y que posiblemente ya tuvo que pagar, es evidentemente injusto, y desproporcionado.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER:

El problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si a la demandante le asiste derecho a pensión de vejez bajo los presupuestos del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, como beneficiaria de la transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta meses de 28, 29, 30 o 31 días. En caso positivo, se analizará si el retroactivo liquidado por el a quo, se encuentra conforme a derecho y si le asiste derecho a los intereses moratorios.

Ttramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la apelación y consulta de la sentencia de primera instancia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de las partes, se consultará la sentencia de primer grado en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Para resolver el presente asunto, tiene presente la Sala que la demandante nació el 21 de enero de 1951 conforme al registro civil de nacimiento y de la fotocopia de la cédula, insertos a folios 14 y 40 del expediente digital de primera instancia, por lo que para para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del sistema pensional de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad, y de igual manera, se encontraba afiliada al I.S.S., hoy COLPENSIONES, antes de esta calenda, como se

acredita con los reportes de semanas cotizadas obrantes a folios 17 a 26 y 68 a 73 del expediente digital de primera instancia, en el que registra cotizaciones al ISS desde el año 1992, por lo que en principio es beneficiaria del régimen de transición de pensiones de vejez del extinto I.S.S., hoy COLPENSIONES, conforme al art. 36 de Ley 100 de 1993.

A pesar de lo expresado en precedencia, impone recordar que el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso en su párrafo transitorio 4to, que el régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, terminaba el 31 de julio de 2010, dejando a salvo a quienes estando en dicho régimen, tuvieran a la fecha de su entrada en vigencia (29 de Julio de 2005 conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional), 750 o más semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, a los que se les extiende el régimen de transición hasta el año 2014.

En el caso de la demandante, como beneficiaria del régimen de transición del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, por tener afiliación extinto ISS hoy COLPENSIONES, desde el año 1992 en que registra sus primeras cotizaciones, tiene derecho a que se le defina el derecho que pueda tener a la peso de vejez, con las normas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de mismo año, el que otorga derecho a pensión de vejez al afiliado o afiliada al régimen pensional del I.S.S. hoy COLPENSIONES, que tenga cotizadas 1000 semanas en cualquier tiempo o 500 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, edad que en el caso de las mujeres es de 55 años.

La demandante pretende la pensión en el libelo con las 500 semanas cotizadas en los veinte 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, de 55 años, la que cumplió el 21 de enero de 2006, se hace necesario auscultar si entre esta fecha y el mismo día y mes del año 1986, cuenta con las referidas 500 semanas cotizadas.

Revisado el detalle de cotizaciones, se observa en la historia laboral que milita a folios 17 a 26 y 68 a 73 del expediente digital de primera instancia, que, entre el 21 de enero de 2006, y este mismo día y mes del año 1986, cuenta con **498,43 semanas** efectivamente reportadas como cotizadas, como se muestra a continuación:

HASTA	IBC O SALARIO	No. DÍAS
1-sept-92	TEMPORALES ARCO	22
1-oct-92	TEMPORALES ARCO	31
1-nov-92	TEMPORALES ARCO	30
1-dic-92	TEMPORALES ARCO	23

1-ene-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	24
1-feb-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	28
1-mar-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-abr-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-jun-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-ago-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-sept-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-nov-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-93	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	20
1-ene-94	PROTEMPORE	21
1-feb-94	PROTEMPORE	28
1-mar-94	PROTEMPORE-TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-abr-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-jun-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-ago-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-sept-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-nov-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-94	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	31
1-ene-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-feb-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-mar-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-abr-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jun-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ago-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-sept-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-nov-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-95	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ene-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-feb-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-mar-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-abr-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jun-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ago-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-sept-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-nov-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-96	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ene-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-feb-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-mar-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-abr-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30

1-jun-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ago-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-sept-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-nov-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-97	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ene-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-feb-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-mar-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-abr-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-may-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jun-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-jul-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ago-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-sept-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-oct-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-nov-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-dic-98	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	30
1-ene-99	TAPICERIA AUTOMOTRIZ	20
1-ago-02	AURA ELENA ARANGO	30
1-sept-02	AURA ELENA ARANGO	30
1-nov-02	AURA ELENA ARANGO	30
1-dic-02	AURA ELENA ARANGO	30
1-ene-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-feb-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-mar-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-abr-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-may-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-jun-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-jul-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-ago-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-sept-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-oct-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-nov-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-dic-03	AURA ELENA ARANGO	30
1-ene-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-feb-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-mar-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-abr-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-may-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-jun-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-jul-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-ago-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-sept-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-oct-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-nov-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-dic-04	AURA ELENA ARANGO	30
1-ene-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-feb-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-mar-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-abr-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-may-05	AURA ELENA ARANGO	30

1-jun-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-jul-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-ago-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-sept-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-oct-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-nov-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-dic-05	AURA ELENA ARANGO	30
1-ene-06	AURA ELENA ARANGO	21
TOTAL DÍAS		3489
TOTAL SEMANAS		498,43

Sin embargo, la actora solicita en la demanda, que se contabilicen los meses completos, es decir, teniendo en cuenta 28, 29, 30 y 31 días, pues considera que de esta manera, puede alcanzar las 500 semanas que requiere para obtener la pensión de vejez, bajo las previsiones del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición.

En este sentido, el juez de primera instancia para declarar la prosperidad de las pretensiones, citó en sus considerandos el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que señala que se entiende por semana cotizada, el periodo de 7 días calendario, de manera que sumó todos los días laborados por la demandante y los dividió entre 7, resultando de dicha operación, que la actora acreditaba 505.57 semanas cotizadas, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, las que consideró suficientes para acceder a la pensión pretendida.

Frente al tema, esta Sala de Decisión, ha tenido la oportunidad de pronunciarse anteriormente en asuntos similares y en aquellas providencias, ha echado mano de la reiterada jurisprudencia que sobre el asunto, ha estudiado en varias oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien ha señalado que la correcta contabilización de los términos para la afiliación o cotización se toman teniendo en cuenta que una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días, y por ende ese cómputo no se mide por los días calendario. Así lo ha señalado reiteradamente en sentencias CSJ SL3794-2015, rad. 56639 y CSJ SL7995-2015, rad. 53082, esta última reiterada en providencia CSJ SL2050-2017, rad. 46017, CSJ SL529-2018, rad. 64588 y más recientemente en sentencia SL3130-2022, última providencia en la que en un asunto de similares contornos al tratado en esta oportunidad, señaló:

“De acuerdo con lo anterior, una cosa debe quedar en claro, en el embate no se hace cuestionamiento a los tiempos que se reportan como cotizados, sino su equivalencia en días que se trasponen a semanas y años. De esta manera, y reiterando que el

ataque se dirige por la vía directa, aquella consideración del fallador sobre este particular, que aparece consignada en los folios 7, 8 y 9 de la providencia de segundo grado, apartes por demás enunciados en el cargo, no serán objeto de análisis en un marco diferente al expresado en este último.

De manera que, le corresponde a la Sala, el determinar si el colegiado incurrió en una interpretación errónea de la previsión legal consignada en el parágrafo 2º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 cuando allí se dispone que “se entiende por semana cotizada el periodo de 7 días calendario”, pero concluye que los años deben ser contabilizados por 360 días calendario y no 365 o 366 días.

Sobre este particular, recordemos la posición mayoritaria de la Corte, la cual se acompasa con aquello expuesto por el juez de alzada. En efecto, recientemente, esta Sala en la sentencia CSJ SL3585-2020, donde se reitera lo expresado en la CSJ SL7995-2015 razonó:

[E]n lo concerniente al cómputo de semanas que alega la actora debe realizarse sobre 365 días al año, la Corte recuerda que la correcta contabilización de los términos para la afiliación o cotización se toman así: **una semana equivale a 7 días, un mes debe considerarse que es de 30 días y, por consiguiente, un año corresponde a 360 días y, por ende, ese cálculo no se mide por los días calendario.** Así lo dijo en sentencias CSJ SL3794-2015, rad. 56639 y CSJ SL7995-2015, rad. 53082, reiteradas en providencias CSJ SL2050-2017, rad. 46017 y SL529-2018, rad. 64588.

En la sentencia hito CSJ SL7995-2015, del 25 mar. 2015, rad. 53082, esta Sala sostuvo al respecto:

Aun cuando desde la demanda inicial la actora planteó la necesidad de calcular la anualidad de aportes como equivalente a 365 o 366 días y no a 360, la mensualidad a los propios de cada una de ellas, o sea, 28, 29, 30 o 31 y no a 30; y la semana a 7, que es lo que indica en este último caso la ley, con lo cual alcanzaría el número de semanas de cotización que asigna a las 20 anualidades de aportes exigidos en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 (1.029 para ser exactos), la razón no le asiste en manera alguna, pues es indiscutible que los plazos previstos en la ley repudian la contabilización de términos sobre el único concepto de ‘día’, dado que los hay de otros órdenes, como son los de semanas, meses y años, con la incidencia de que en tanto los de ‘días’ y de ‘semanas’ son por esencia uniformes --hablando de que los primeros siempre se cuentan en una unidad inferior de tiempo de 24 horas y las segundas de 7 días--, los meses y los años no lo son, dado que los meses lo pueden ser de 28, 29, 30 o 31 días y los años de 365 o 366 días. Tal divergencia se ha superado teniendo el término del mes como equivalente a 30 días, y por ende, el del año a 360 días (12 x 30).

De esa manera es que ha resultado dable al legislador facilitar el uso de distintos plazos a los particulares en el desenvolvimiento de sus diversas relaciones jurídicas, y a estos, adquirir seguridad para saber cómo se computan los plazos o términos acordados --en los actos jurídicos de esa naturaleza-- o los impuestos por éste mismo, para de esa forma tener certeza sobre el nacimiento o extinción de sus obligaciones o derechos.

Ello explica que en el mundo del trabajo el salario, las prestaciones sociales

de cualquier naturaleza y demás conceptos de orden laboral se paguen regularmente por quincenas, mensualidades o anualidades sin distinción al número de días calendario al cual corresponda el respectivo período laborado. También, que para efectos fiscales se tomen en cuenta similares guarismos, y que salvo disposición legal en contrario, las cotizaciones se sufraguen en idénticos términos. Tal tipo de convención en manera alguna contradice el sentido común de las cosas, más bien se respalda en él, como en disposiciones como las consignadas en los artículos 18 de la Ley 100 de 1993, 134 del Código Sustantivo del Trabajo, 67 del Código Civil, 59 de la Ley 4ª de 1913, entre otras, que, en suma, predicen una uniformidad de medida de los tiempos en que se cumplen los plazos y los términos de la ley.

En suma, como lo ha dejado dicho la jurisprudencia, los términos de afiliación o cotización a los entes administradores de riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral no se miden por los días calendario, sino por términos uniformes de 7, 30 y 360 días, respectivamente, es decir, semanas, meses y anualidades.” **(Negritas agregada)**

Corolario de lo indicado, la contabilización de los periodos cotizados, observando los reglamentos del ISS, se hace de manera diferente dependiendo de si el servicio se prestó antes o después de que entró en vigor la Ley 100 de 1993, cuando quien ha de reconocer la prestación pensional es Colpensiones, de manera que si fueron anteriores a la entrada en vigencia de la citada Ley, se pueden contabilizar teniendo en cuenta los días de cada mes, pero si los periodos cotizados son posteriores a la citada Ley, se deben atender anualidades de 360 días, lo que se traduce en 51,42 semanas al año y 4,29 (por aproximación) al mes.

Conforme las consideraciones, fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, no comparte la Sala la decisión a la que llegó el *a quo* en primera instancia, concluyendo que la demandante no reúne las semanas mínimas exigidas en el Decreto 758 de 1990 como beneficiaria del régimen de transición para acceder a la pensión de vejez, pues solo registra en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para acceder a la pensión de vejez, con 3489 días cotizados que equivalen a 498,43 semanas de los que incluso habría que descontar cinco días, de los meses posteriores al 1 de abril de 1994, que se registran con 31 días, debiendo en ese sentido REVOCAR la decisión de primer grado para en su lugar, absolver a COLPENSIONES de las pretensiones incoadas en su contra por la parte actora, declarando probada las excepciones de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR PENSIÓN DE VEJEZ e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DIFERENCIAR MESES DE 28, 29, 30 O 31 DÍAS, de manera que por sustracción de materia, se hace innecesario pronunciamiento sobre los restantes puntos apelación de COLPENSIONES y la apelación de la demandante.

Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*.

Sin costas en esta instancia por haber prosperado la apelación de COLPENSIONES, lo que conllevó a que no se decidiera la apelación de la demandante.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia del 03 de junio de 2020 proferida por el JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **AURA ELENA ARANGO GIRALDO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES**, para en su lugar ABSOLVER a esta entidad de todas las pretensiones de la parte actora por la prosperidad de la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR PENSIÓN DE VEJEZ e INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DIFERENCIAR MESES DE 28, 29, 30 O 31 DÍAS.

SEGUNDO: Costas en primera instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada COLPENSIONES las que fijará el *a quo*.

Sin costas en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes por EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0273f9a5d30564e59b115fa13d75b9f947e217a55c23ef58ac64f030ca1a883b**

Documento generado en 19/05/2023 02:45:37 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>